



RESOLUCIÓN PA-63/2023, de 18 de julio

Artículos: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 23 y DF 5ª LTPA

Asunto: Procedimiento iniciado de oficio por presunto incumplimiento del Ayuntamiento de Benalúa de las Villas (Granada) de la obligación de publicidad activa prevista en el art. 10.3 LTPA, en el ámbito del Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa 2023-2024

Denuncia: PAI-70/2023

Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA)

ANTECEDENTES

Primero. Entre las funciones que el art. 48.1 LTPA atribuye a la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) figura en su letra g) la de ejercer el control de la publicidad activa de los sujetos obligados a la misma.

Con este objeto la Dirección del Consejo aprobó, con fecha 1 de febrero de 2023, el nuevo Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa 2023-2024 (publicado en BOJA núm. 25, de 7 de febrero de 2023).

Segundo. Dentro de las tres líneas en las que se estructura el mencionado Plan se inserta la Línea 2, que tiene como objeto la “[v]erificación de la publicación de las actas de las sesiones plenarias de las entidades locales”, en aplicación de la exigencia de publicidad activa prevista en el art. 10.3 LTPA.

El protocolo aprobado por la Dirección del Área de Transparencia para el desarrollo de las actuaciones inspectoras de la Línea 2 (en fecha 13 de marzo de 2023) incluye en su ámbito subjetivo de actuación una muestra aleatoria de, al menos, veinte entidades locales andaluzas incluidas en el Registro Andaluz de Entidades Locales (RAEL) y que no estén incluidas en la Línea 1 del Plan.

De este modo, la muestra seleccionada resultó de la extracción aleatoria (de acuerdo con las reglas que concreta dicho Protocolo) de veinte entidades incluidas en el RAEL, figurando el Ayuntamiento de Benalúa de las Villas (Granada) entre las mismas.

Tercero. En el marco de las funciones investigadoras realizadas por el personal del Consejo en el curso de las actuaciones inspectoras inherentes a la citada Línea 2 del Plan, este órgano de control pudo advertir —tras las consultas efectuadas en fechas 5 y 8 de mayo de 2023— que la información que se ofrece en la página web de la referida entidad local no satisface de modo adecuado la obligación de publicidad activa prevista en el art. 10.3 LTPA, al no constar publicada información sobre las actas correspondientes a las sesiones celebradas por su órgano plenario durante el periodo 2017-2018 y el año 2022 —a excepción de tres actas referidas al año 2022—.



Cuarto. A la vista de lo anterior, con fecha 22 de mayo de 2023, el Director del Consejo acordó la iniciación del procedimiento para requerir la subsanación del presunto incumplimiento de la obligación de publicidad activa descrita.

Quinto. Con fecha 25 de mayo de 2023, este órgano de control notificó a la repetida entidad local el Acuerdo anterior otorgándole un plazo de alegaciones de veinte días en el que podría formular las alegaciones que tenga por convenientes o subsanar anticipadamente las incidencias advertidas. De igual modo, se ponía en su conocimiento que el ejercicio de esta última opción exigiría publicar la información correspondiente en su página web y comunicarlo a este Consejo, determinando, en su caso, el archivo de las actuaciones.

Sexto. Con idéntica fecha, en contestación del requerimiento anterior, tiene entrada en el Consejo escrito remitido por el Ayuntamiento de Benalúa de las Villas (Granada) comunicándose por parte de su Secretario-Interventor lo siguiente:

“Comprobado el portal de Transparencia, se consta[ta] que únicamente desde el año 1997 falta un acta de 2022, la cual ya ha sido incluida en el epígrafe correspondiente del Portal de Transparencia. El apartado donde se incluyen las actas desde el año 1997 puede consultarse en el apartado B6 del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Benalúa de las Villas: *[Se indica enlace web]* Entendiendo que el Ayuntamiento satisface de modo adecuado la obligación de publicidad activa prevista en el art. 10.3 LTPA”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. La competencia para la resolución de este procedimiento reside en el Director del Consejo, de acuerdo con lo previsto en el art. 10.3 b) de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (aprobado por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre), y en el art. 48.1 g) LTPA, en conexión con el art. 23 del mismo texto legal.

Debe destacarse a su vez que, en virtud del art. 16.5 del citado Decreto 434/2015, *“[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”*, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos inspeccionados en relación con la puesta a disposición de la información que les pueda ser requerida durante el transcurso de las actuaciones inspectoras.

Segundo. Como establece el art. 2 b) LTPA, la publicidad activa consiste en *“la obligación de las personas y entidades a las que hacen referencia los artículos 3 y 5 de hacer pública por propia iniciativa, en los términos previstos en la presente ley, la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública”*. Exigencia de publicidad activa que comporta que la información *“estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web”* de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley (art. 9.4 LTPA), y que tal publicación se realice *“de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada”* (art. 9.1 LTPA), garantizando especialmente que la información que se publica atiende al principio de «veracidad», de tal manera que la misma *“ha de ser cierta y exacta,*



asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia” [art. 6 e) LTPA].

Pero no solo constituye una obligación para las entidades sujetas al cumplimiento de la legislación en materia de transparencia. Pues, según establece el art. 7 a) LTPA, la publicidad activa constituye igualmente un *“derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen [...] de forma periódica y actualizada la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”.*

Tercero. El art. 10.3 LTPA establece como obligación de publicidad activa la publicación de las actas de las sesiones plenarias de las entidades locales, con la finalidad de posibilitar su consulta por parte de la ciudadanía y favorecer la participación de ésta en los asuntos locales.

Así pues, el procedimiento que se tramita encuentra su fundamento en que por parte del Ayuntamiento inspeccionado no se ha satisfecho la obligación de publicidad activa prevista en el art. 10.3 LTPA en los términos relacionados en el Antecedente Tercero, hecho que motivó la incoación (en fecha 22/05/2023) del procedimiento que ahora se resuelve para requerir la subsanación del presunto incumplimiento advertido, al no poder constatarse la disponibilidad en sede electrónica, portal o página web de información sobre las actas correspondientes a las sesiones celebradas por su órgano plenario durante el periodo 2017-2018 y el año 2022 —a excepción de tres actas referidas al año 2022—.

En este sentido, debe reseñarse que la obligación de publicar tales actas resultó exigible para las entidades locales desde el 10 de diciembre de 2016, en virtud de lo establecido en el apartado 2 de la Disposición Final Quinta LTPA.

Cuarto. Con ocasión de las alegaciones presentadas ante este órgano de control en fecha 25/05/2023, el Ayuntamiento inspeccionado ha puesto de relieve *“que únicamente desde el año 1997 falta un acta de 2022, la cual ya ha sido incluida en el epígrafe correspondiente del Portal de Transparencia”.*

El Consejo, por su parte, tras visitar el enlace facilitado por la entidad, en fecha 30/06/2023 —dejándose oportuna constancia en el expediente de las comprobaciones llevadas a cabo—, ha podido advertir que en el Portal de Transparencia que resulta accesible desde la Sede Electrónica del Consistorio, figura una sección —*“B-Información Jurídica” > “B6-Orden del día de las sesiones del Pleno, así como las actas correspondientes”*— que incorpora más de una veintena de actas correspondientes a sesiones plenarias (ordinarias y extraordinarias) celebradas por la entidad en el periodo 2016-2018, así como dos nuevas actas correspondientes al año 2022, de fechas 10 de marzo y 28 de diciembre.

De esta manera, resultando posible consultar en el Portal de Transparencia de la entidad inspeccionada las actas correspondientes a las sesiones plenarias celebradas durante los ejercicios mencionados, que se unen a las ya advertidas tras la comprobación inicial, el Consejo considera que el propósito de la transparencia al que se incardina de modo preeminente la actuación inspectora debe reputarse satisfecho. Siempre, claro está, que las actas publicadas respondan cuando menos al conjunto de sesiones plenarias (ordinarias y extraordinarias) celebradas por el Consistorio desde el 10 de diciembre de 2016, extremo que parece confirmar el Secretario-Interventor del Ayuntamiento en sus alegaciones.



Así pues, en consonancia con lo expresado en el Antecedente Quinto y lo que venimos declarando en anteriores resoluciones cuando concurren similares circunstancias *[sirvan de ejemplo las Resoluciones PA-3/2022, de 24 de enero (FJ 5º) y PA-7/2022, de 11 de febrero (FJ 5º), entre otras muchas]*, procede el archivo del presente procedimiento.

En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

Único. Se declara el archivo del procedimiento iniciado de oficio por presunto incumplimiento del Ayuntamiento de Benalúa de las Villas (Granada) de la obligación de publicidad activa prevista en el art. 10.3 LTPA.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este Consejo, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Jesús Jiménez López

Esta resolución consta firmada electrónicamente.